



EXPEDIENTE: ISTAI-RR-183/2019.  
SUJETO OBLIGADO: COMISION ESTATAL DE  
DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE  
SONORA.  
RECURRENTE: JUANA DE ARCO.

EN HERMOSILLO, SONORA, A ONCE DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE,  
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,  
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS  
PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-183/2019, substanciado con motivo del recurso de revisión, interpuesto por la C. JUANA DE ARCO, en contra del COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE SONORA, por su inconformidad con la respuesta a su solicitud de información de fecha ocho de febrero de dos mil diecinueve, y;

#### ANTECEDENTES:

1.- Con fecha ocho de febrero de dos mil diecinueve, la Ciudadana **JUANA DE ARCO**, solicitó al sujeto obligado, lo siguiente:

***“...1. Acciones de inconstitucionalidad interpuestas a partir de 2006 por su institución, por año, especificando la ley u ordenamiento impugnado y el estatus actual del recurso. Proporcionar la información en archivo Excel.***

***2. Además de su Ley y Reglamento Interno, proporcione reglamento, lineamientos, manual de procedimientos o cualquier otro documento que regule el proceso por el cual se informa a las personas usuarias de su institución (quejas, peticionarias o agraviadas) del derecho que les asiste para interponer un recurso de queja o impugnación ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como el documento, formato o cualquier otro material utilizado para informarles sobre dicho derecho...”***

2.- Inconforme, la C. **JUANA DE ARCO**, interpuso recurso de revisión, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, en fecha cuatro de marzo de dos mil diecinueve (f. 1). Asimismo, bajo auto de seis de marzo de dos mil diecinueve, le fue admitido, al reunir los requisitos contemplados por el artículo

138<sup>1</sup>, 139<sup>2</sup> y 140<sup>3</sup> de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave **ISTAI-RR-183/2019**.

Además con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción II<sup>4</sup>, de la legislación en cita, se ordenó correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama; de igual forma, se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de acceso a la información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección o medio para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de omitir señalar el mismo, las notificaciones se harían por estrados.

Así también, se notificó a la recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado en el proemio del escrito de interposición del

<sup>1</sup> Artículo 138.- El solicitante podrá interponer, por sí mismo o a través de su representante, de manera directa o por medios electrónicos, recurso de revisión ante el Instituto o ante la Unidad de Transparencia que haya conocido de la solicitud, dentro de los quince días siguientes a la fecha de la notificación de la respuesta, o del vencimiento del plazo para su notificación.

En el caso de que se interponga ante la Unidad de Transparencia, ésta deberá remitir el recurso de revisión al instituto a más tardar doce horas de haberlo recibido.

<sup>2</sup> Artículo 139.- El recurso de revisión procederá en contra de:

- I.- La clasificación de la información;
- II.- La declaración de inexistencia de información;
- III.- La declaración de incompetencia por el sujeto obligado;
- IV.- La entrega de información incompleta;
- V.- La entrega de información que no corresponda con lo solicitado;
- VI.- La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos establecidos en esta Ley;
- VII.- La notificación, entrega o puesta a disposición de información en una modalidad o formato distinto al solicitado;
- VIII.- La entrega o puesta a disposición de información en un formato incomprensible y/o no accesible para el solicitante;
- IX.- Los costos o tiempos de entrega de la información;
- X.- La falta de trámite a una solicitud;
- XI.- La negativa a permitir la consulta directa de la información;
- XII.- La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la respuesta;
- XIII.- La orientación a un trámite específico; u,
- XIV.- Otros actos u omisiones de los sujetos obligados derivados de la aplicación de la presente Ley.

La respuesta que den los sujetos obligados derivada de la resolución a un recurso de revisión que proceda por las causales señaladas en las fracciones III, VI, VIII, IX, X y XI es susceptible de ser impugnada de nueva cuenta, mediante recurso de revisión, ante el Instituto.

<sup>3</sup> Artículo 140.- El recurso de revisión deberá contener:

- I.- El sujeto obligado ante la cual se presentó la solicitud;
- II.- El nombre del solicitante que recurre o de su representante y, en su caso, del tercero interesado;
- III.- Dirección o medio que señale para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica;
- IV.- El número de folio de la solicitud de acceso;
- V.- La fecha en que fue notificada la respuesta al solicitante o tuvo conocimiento del acto reclamado, o de presentación de la solicitud, en caso de falta de respuesta;
- VI.- El acto u omisión que se recurre;
- VII.- Las razones o motivos de inconformidad; y
- VIII.- La copia de la respuesta que se impugna y, en su caso, de la notificación correspondiente, salvo en el caso de respuesta de la solicitud. Adicionalmente, se podrán anexar las pruebas y demás elementos que considere procedentes someter a juicio del Instituto.

En ningún caso será necesario que el particular ratifique el recurso de revisión interpuesto.

<sup>4</sup> Artículo 148.- El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:

(...)

- II.- Admitido el recurso de revisión, el Comisionado ponente deberá integrar un Expediente y ponerlo a disposición de las partes, para que, en un plazo máximo de siete días, manifiesten lo que a su derecho convenga (...)

recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama, ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

3.- El sujeto obligado rindió su informe el trece de marzo del dos mil diecinueve, en el que se le tuvo haciendo una serie de manifestaciones, mismo que se acordó el trece de marzo de dos mil diecinueve, y se notificó al recurrente el diecinueve de marzo de dos mil diecinueve.

4.- Bajo auto de fecha diez de abril de dos mil diecinueve, se decretó el cierre de instrucción correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 148 fracción V<sup>5</sup>, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. Así mismo toda vez que no existen pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omitió abrir el juicio a prueba, y con apoyo en la fracción VII<sup>6</sup>, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se ordena emitir la Resolución correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

### COMPETENCIA:

I.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6 Apartado A fracción IV<sup>7</sup> de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2<sup>8</sup> de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano

<sup>5</sup> Artículo 148.- El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:

(...)

V.- Concluido el plazo señalado en la fracción II del presente Artículo, el Comisionado ponente procederá a decretar el cierre de instrucción;

<sup>6</sup> Artículo 148.- (...)

VII.- Decretado el cierre de instrucción, el Expediente pasará a resolución, la cual deberá dictarse dentro de un plazo que no podrá exceder de veinte días.

<sup>7</sup> Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:

IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece esta Constitución.

<sup>8</sup> Artículo 2.- En Sonora la investidura de los funcionarios públicos emana de la Ley y está sujeta a ella. Las prescripciones legales constituyen el único límite a la libertad individual. En este concepto, las autoridades sólo pueden obrar ejercitando facultades expresas de la Ley y los particulares pueden hacer todo lo que ésta no les prohíba. En materia de información pública: APARTADO A.- El Estado de Sonora reconoce el derecho humano de toda persona al libre acceso a la información

de Sonora; y del 33<sup>9</sup> y 34 fracción I, II y III<sup>10</sup> y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

Además, es importante señalar que el **COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE SONORA**, encuadra en su calidad de sujeto obligado, lo cual se advierte de su reglamento interno en el artículo 1 y de conformidad en el artículo 22 fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

### CONSIDERACIONES:

Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente.

Como criterio orientador, resulta conveniente citar la jurisprudencia número 940 publicada en la página 1538 de la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917 – 1988, que a la letra señala:

*“...Improcedencia. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías...”*

Para tal efecto se cita a continuación el contenido del artículo 153 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, que contiene la hipótesis de improcedencia:

**Artículo 153.-** *El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:*

- I.- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Artículo 138 de la presente Ley;*
- II.- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el recurrente;*
- III.- No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;*
- IV.- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de la presente Ley;*
- V.- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;*

veraz, verificable, confiable, actualizada, accesible, comprensible y oportuna. Comprende su facultad para solicitar, buscar, difundir, investigar y recibir información. Es obligación de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, incluidas sociedades, organizaciones e instituciones de derecho privado con participación estatal y municipal, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba, administre y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito estatal y municipal, para garantizar el libre ejercicio de este derecho, para difundir y hacer del conocimiento público la información que se le solicite así como, poner a disposición las obligaciones de transparencia y toda aquella información que se considere de interés público que fijen las leyes. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales serán protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. (...)

<sup>9</sup> Artículo 33.- El Instituto es un organismo público autónomo, creado por disposición expresa de la Constitución Política del Estado, depositario de la autoridad en la materia, con personalidad jurídica, patrimonio y competencia propios.

<sup>10</sup> Artículo 34.- El Instituto tendrá las siguientes atribuciones:

- I.- Interpretar esta Ley y demás ordenamientos que les resulten aplicables y que deriven de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política Local y la Ley General;
- II.- Conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de las resoluciones de los sujetos obligados, en términos de lo dispuesto en el Capítulo Noveno, Sección I de esta Ley;

VI.- Se trate de una consulta; o

VII.- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos contenidos.

En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa es posible advertir que no se actualizan alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión.

II.- La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien, confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se determinará con claridad el acto impugnado y en torno a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo estipulado en el artículo 149<sup>11</sup> de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

III.- En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó que le causa agravios:

Que se le brindo información incompleta porque no se le proporcionó lo relativo al punto numero dos de su solicitud de información.

IV.- Por su parte, el sujeto obligado -en lo que interesa- rinde informe correspondiente en los siguientes términos:

Manifiesta que envió información en tiempo y forma, asimismo, manifestó que anexó una ampliación de respuesta, en la cual se advierte el proceso por el cual se informa a las personas usuarias del derecho que les asiste para interponer un recurso de queja o impugnación ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que se sustenta en lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley que crea la comisión Estatal de Derechos Humanos, y en los artículos 159 fracción I y 160 del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y, en los puntos resolutivos de las resoluciones que emite la comisión Estatal de Derechos Humanos, en los cuales se les ordena informar o notificar ese derecho.

<sup>11</sup> Artículo 149.- Las resoluciones del Instituto podrán:

I.- Desechar o sobreseer el recurso;

II.- Confirmar la respuesta del sujeto obligado, o

III.- Revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado.

Las resoluciones establecerán, en su caso, los plazos y términos para su cumplimiento y los procedimientos para asegurar su ejecución, los cuales no podrán exceder de diez días para la entrega de información. Excepcionalmente, el Instituto, previa fundamentación y motivación, podrán ampliar estos plazos cuando el asunto así lo requiera.

Las resoluciones del instituto son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados.

V. Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo siguiente:

En el caso que nos ocupa, el recurrente está inconforme con la respuesta emitida por el sujeto obligado.

Por su parte el sujeto obligado, al rendir el informe manifiesta que se le envió información en tiempo y forma, la cual adjunta en su informe, asimismo rinde una ampliación a su informe mejorando su respuesta y anexó información en relación a el proceso por el cual se informa a las personas usuarias del derecho que les asiste para interponer un recurso de queja o impugnación ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que se sustenta en lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley que crea la comisión Estatal de Derechos Humanos, y en los artículos 159 fracción I y 160 del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y, en los puntos resolutivos de las resoluciones que emite la comisión Estatal de Derechos Humanos, en los cuales se les ordena informar o notificar ese derecho.

VI.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Generales, Federales y Estatales, encuadrando dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96<sup>12</sup>, 99, 107, y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

---

<sup>12</sup> Artículo 96.- Los sujetos obligados, por conducto de los titulares de sus áreas, podrán excepcionalmente restringir el acceso a información pública en su poder, cuando por razones de interés público ésta deba ser clasificada como reservada hasta por cinco años, en razón de que su publicación podría generar cualquiera de los siguientes supuestos:

I.- Ponga en riesgo la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona física;

II.- Pueda comprometer la seguridad pública del Estado y sus Municipios, y cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable;

III.- Pueda causar un serio perjuicio u obstruya:

a) Las actividades de prevención o persecución de los delitos;

b) Las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las leyes o afecte la recaudación de contribuciones; y haya dictado resolución definitiva.

IV.- Contengan las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada. Se considera que se ha adoptado la decisión definitiva cuando el o los servidores públicos responsables de tomar la resolución resuelvan de manera concluyente una etapa, sea o no susceptible de ejecución;

V.- Afecte el derecho al debido proceso;

VI.- Vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado;

VII.- Se trate de información contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público;

VIII.- Toda aquella información que por disposición expresa de una ley tenga tal carácter, siempre que sea acorde con las bases, principios y disposiciones establecidos en la Ley General y no la contravengan; así como las previstas en tratados internacionales que el Estado Mexicano sea parte.

Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad con el artículo 7<sup>13</sup> y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.

En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:

***“...1. Acciones de inconstitucionalidad interpuestas a partir de 2006 por su institución, por año, especificando la ley u ordenamiento impugnado y el estatus actual del recurso. Proporcionar la información en archivo Excel.  
2. Además de su Ley y Reglamento Interno, proporcione reglamento, lineamientos, manual de procedimientos o cualquier otro documento que regule el proceso por el cual se informa a las personas usuarias de su institución (quejas, peticionarias o agraviadas) del derecho que les asiste para interponer un recurso de queja o impugnación ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como el documento, formato o cualquier otro material utilizado para informarles sobre dicho derecho...”***

Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en contrario; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado a continuación encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.

En efecto, se tiene que la información que surge al contestarse lo anterior es pública, ello en términos de los artículos 3 fracción XX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; puesto que es de aquellas que se contienen en documentos que los sujetos obligados generan, administran, obtienen, adquieren, transforman, poseen o conservan por cualquier título; sin embargo, no es obligación por parte del sujeto obligación tenerla publicada, por lo tanto, es de aquella que debe brindarse cuando le es

<sup>13</sup> Artículo 7.- El derecho de acceso a la información o la clasificación de la información se interpretarán bajo los principios establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, la Ley General y la presente Ley.

En la aplicación e interpretación de la presente Ley deberá prevalecer el principio de máxima publicidad, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, la Ley General, así como en las resoluciones y sentencias vinculantes que emitan los órganos nacionales e internacionales especializados, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Para el caso de la interpretación, se podrá tomar en cuenta los criterios, determinaciones y opiniones de los organismos nacionales e internacionales, en materia de transparencia.

solicitada; así también, se advierte que no encuadra dentro de las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 81 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, que contemplan las obligaciones generales y específicas de los sujetos obligados, ni además dentro de las estipuladas en el artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, pero independientemente de que no sea una obligación de transparencia, la información solicitada debe ser entregada en la modalidad pedida, al ser de naturaleza pública.

Siendo importante aducir al tenor de los artículos 17<sup>14</sup> y 126<sup>15</sup> de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, que los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones y debemos partir que se presume la existencia de información si se refiere a facultades, competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos otorgan.

VII.- En ese tenor, previo a analizar el fondo del asunto que nos ocupa, es importante observar los siguientes artículos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, que disponen lo siguiente:

*“Artículo 149.- Las resoluciones del Instituto podrán:  
I.- Desechar o sobreseer el recurso;”*

*Artículo 154.- El recurso será sobreseído, en todo o en parte, cuando una vez admitido, se actualicen alguno de los siguientes supuestos:*

*III.- El sujeto obligado responsable del acto lo modifique o revoque de tal manera que el recurso de revisión quede sin materia.”*

De lo anterior se desprende que el Legislador Ordinario otorgó a este Instituto, la facultad de sobreseer un recurso, lo cual puede presentarse entre otros casos, cuando el sujeto obligado cumpla con la resolución impugnada o la modifique de tal modo que quede sin materia el recurso de revisión interpuesto, razón por la cual lo conducente para concluir si se actualiza lo precitado, es comparar la información recibida por el sujeto obligado al rendir

<sup>14</sup> Artículo 17.- Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones.

<sup>15</sup> Artículo 126.- Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de entre aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la información o del lugar donde se encuentre así lo permita.

Todos los sujetos obligados procurarán tener disponible la información pública al menos en formatos electrónicos. En el caso de que la información solicitada consista en bases de datos se deberá privilegiar la entrega de la misma en formatos abiertos.



su informe frente a la solicitud de acceso a la información de fecha de ocho de febrero de dos mil diecinueve.

Una vez que fue comparada la información, se estima que modificó la resolución impugnada porque en autos consta la respuesta a la solicitud de acceso a la información, la cual se aprecia al observar que el sujeto obligado en el transcurso del procedimiento mejora la respuesta otorgada al recurrente, toda vez que el sujeto obligado en relación al punto número dos de la solicitud de información refirió que se les informa a las personas usuarias del derecho que les asiste para interponer un recurso de queja o impugnación ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que se sustenta en lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley que crea la comisión Estatal de Derechos Humanos, y en los artículos 159 fracción I y 160 del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y, en los puntos resolutive de las resoluciones que emite la comisión Estatal de Derechos Humanos, en los cuales se les ordena informar o notificar ese derecho.

Por lo anterior es que este Instituto puede pronunciarse, al observar que la información pedida con la rendida, satisfacen lo solicitado por el recurrente.

Con lo anterior es dable concluir, que, de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se sobresee el recurso de revisión que nos ocupa, ello al tenor de lo dispuesto por el artículo 149 fracción I y 154 fracción III, de la precitada Ley, ya que se considera que se modificó la resolución impugnada de forma tal que quedó sin materia el presente recurso.

**VIII.-** Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:

*“El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones.”*

Por lo anterior, es que este Instituto estima que existe una probable existencia de responsabilidad del sujeto obligado **COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE SONORA**, en virtud de que encuadra en la fracción V del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la

materia de la presente Ley; se ordena se girar atento oficio con los insertos necesarios a la Titular de la Contraloría Interna del Sujeto Obligado, para efecto de que dé inicio al procedimiento e investigue la posible responsabilidad en que incurrió el Sujeto Obligado, conforme lo establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.

En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado de Sonora, 1, 2, 22, 33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

### **PUNTOS RESOLUTIVOS:**

**PRIMERO:** Por lo expuesto en el considerando séptimo (VII) de la presente resolución, se **SOBRESEE** la acción ejercitada por la Ciudadana **JUANA DE ARCO**, porque ningún sentido tendría continuar la tramitación de un recurso que quedó sin materia remitiéndonos al análisis expuesto en el considerando en comento.

**SEGUNDO:** Por lo expuesto en el cuerpo de ésta resolución, estima que existe una probable existencia de responsabilidad del sujeto obligado **COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE SONORA**, en virtud de que encuadra en la fracción V del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley; en consecuencia, se ordena se girar atento oficio con los insertos necesarios a la Titular de la Contraloría Interna del Sujeto Obligado, para efecto de que dé inicio al procedimiento e investigue la posible responsabilidad en que incurrió el Sujeto Obligado, conforme lo establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.

**TERCERO: NOTIFÍQUESE** a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta resolución, en términos del artículo 148 último párrafo; y:

**CUARTO:** En su oportunidad archívese el asunto como total y

definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

**ASÍ LO RESOLVIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADA MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MAESTRO ANDRES MIRANDA GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE, HABIÉNDOSE HECHO LA PUBLICACIÓN DE SU SENTIDO EN LUGAR VISIBLE DE ESTE ÓRGANO PÚBLICO.- CONSTE.**

MALN/AADV/NCSA

**LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ  
COMISIONADO PRESIDENTE**

**LICENCIADA MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO  
COMISIONADA**

**MAESTRO ANDRES MIRANDA GUERRERO  
COMISIONADO**

*Ivone Duarte Márquez  
Testigo de Asistencia*

*María del Rosario Camacho Figueroa.  
Testigo de Asistencia*

*Aquí termina resolución de recurso de revisión ISTAI-RR-183/2019.*